

1.0 Contexto nacional y cultura política

1.1 Introducción

En este primer capítulo presentaremos, en primer lugar, un panorama de la situación socio-económica y de la coyuntura política del país que constituyen el marco de referencia que nos permite comprender mejor este estudio realizado a inicios del 2004.

También queremos mencionar brevemente los principales estudios realizados con distintos enfoques y metodologías sobre la temática de la cultura política nicaragüense, dentro de los cuales se ubica una serie de encuestas realizadas por el Dr. Seligson que nos permiten visualizar las tendencias y variaciones experimentadas en los últimos años.

1.2 Situación socioeconómica

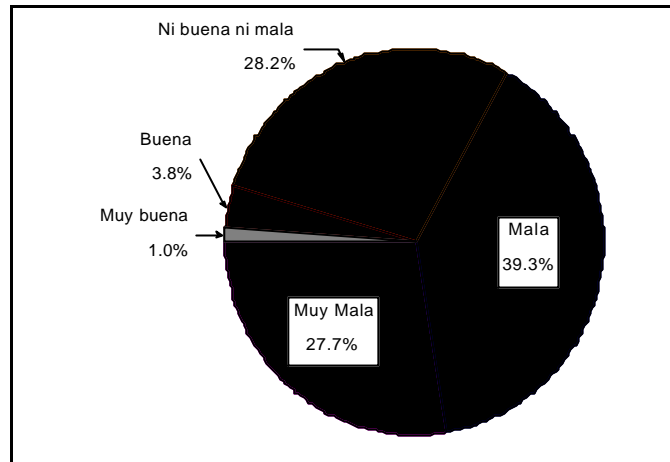
La economía nicaragüense se caracteriza por una estructura productiva atrasada tecnológicamente, con un predominio de actividades primarias (30% PIB) un sector industrial débil y disperso (28% PIB) y amplio sector terciario de servicios personales y comercio informal.¹ La situación económica que experimenta Nicaragua en la actualidad se caracteriza por profundos desequilibrios provocados por un elevado déficit fiscal (6.8% del PIB 2003), un limitado Producto Interno Bruto (U\$ 4,135 mill PIB nominal) que solo cubre una mitad de la demanda global y un fuerte déficit en la balanza comercial (U\$1,282 en 2003) que alcanzo el 31% del PIB en 2003.²

La tasa de crecimiento económico medio anual en el periodo 1994-2003 fue de 3.7%, con una tasa de inflación promedio de 8%, mientras la población ha crecido a un 2,7% anual y la tasa de sub-utilización laboral alcanzo al 27% de la PEA en 2003, lo cual explica que la mayoría de los encuestados en este estudio (67%) califican de mala o muy mala la situación económica del país (ver Gráfica I.1) y perciben que en el futuro próximo seguirá igual o peor. Sin embargo un tercio de la población encuestada manifestó tener expectativas positivas con la futura implementación de un tratado de libre comercio entre USA y Centroamérica.

¹ García-Huidobro G., Política macroeconómica y empleo en Nicaragua, OIT, San José, 2003 Pág. 9.

² Avendaño Nestor, "Equidad e integración social de las políticas públicas: Nicaragua 1990-2003", Mimeo, 2004.

Gráfica I.1 Percepción sobre la economía nacional



La deuda externa de Nicaragua que sumaba U\$6,596 mill (Dic.2003) ha sido reducida a inicios del 2004 en un 80% al calificar Nicaragua en la Iniciativa de Países Altamente Endeudados (HIPC). Por otro lado, existe una pesada deuda interna originada en los créditos contraídos por los gobiernos para hacer frente a las indemnizaciones de los expropiados durante los 80s y para cubrir las quiebras bancarias de los 90s.³

Las remesas internacionales de trabajadores nicaragüenses (estimada en U\$800 mill. Anual) sumado a la ayuda externa, de organismos donantes e instituciones financieras internacionales (U\$750 mill anual en 90s), le ha permitido a Nicaragua mantener esta situación crítica bajo una relativa estabilidad de precios internos y del tipo de cambio.

El contexto socio-económico esta marcado por la situación de pobreza que afecta a la mayoría de la población nicaragüense que oscila entre un 45% (incluyendo 15% en extrema pobreza) según las cifras oficiales basadas en el método de “agregado de consumo”⁴ y asciende a un 75% de la población (incluyendo 46% en extrema pobreza) según estudios independientes utilizando el método de “necesidades básicas insatisfechas.”

La pobreza presenta una mayor incidencia en las zonas rurales que en las urbes, y afecta particularmente a los grupos sociales de mujeres, niños e indígenas. Es lamentable observar que 6 de cada 10 niños / as están en situación de pobreza y 2 de ellos / as en extrema pobreza. El ingreso promedio per capita de los hogares es de U\$ 60, es decir para sobrevivencia con U\$ 2 diarios que alcanza para 1.5 platos de comida básica⁵. En este estudio encontramos que un 54% de los hogares encuestados obtiene menos de C\$ 1,500 al mes (U\$ 90) cuando la canasta básica por hogar (6 personas) se estimaba a inicios del 2004 en C\$ 4,500 (U\$ 290).

Otros indicadores sociales nos muestran que un 44% de la población del país viven en condiciones de hacinamiento en sus viviendas, un 32% ciento no tenía acceso al agua potable,

³ Se declararon en quiebra 6 bancos con pérdidas de U\$530 mill que fue cubierta por el Banco Central, es decir que pagaran los contribuyentes.

⁴ INEC, *Encuesta de Hogares de Medición de Niveles de Vida EMNV 2001*, INEC, Managua, 2002.

⁵ PNUD, *Informe de Desarrollo Humano: Nicaragua 2002. Las condiciones de la esperanza*, Managua, Pág. 65.

48% por ciento no disponía del servicio de la energía eléctrica. El deterioro de los indicadores de educación, salud e ingresos ha significado que Nicaragua ha descendido en el Índice de Desarrollo Humano al puesto 121 de 175 países del mundo, ubicándose en la posición mas baja de Centroamérica como muestra la siguiente tabla comparativa.

Tabla I.1 Clasificación de los países centroamericanos según el IDH (2001)

Puesto	País	IDH	Valor IDH
42	Costa Rica	Alto	0.832
59	Panamá	Medio	0.788
105	El Salvador	Medio	0.719
115	Honduras	Medio	0.667
119	Guatemala	Medio	0.652
121	Nicaragua	Medio	0.643

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2003.

En este contexto critico, observamos una alta tasa de crecimiento de la población determinada por la elevada fecundidad que alcanza el 3.2%, siendo el doble en el ámbito rural (4.4%) comparado con las áreas urbanas (2.6%) Sin embargo, en una perspectiva de mediano plazo se observa una tendencia claramente decreciente en los 90s pasando de un 4.6% en 1985 a 3.6% en 1998 y 3.2 en 2001.

El desempleo abierto alcanza a un 13% de la población económicamente activa sumada un 36% en situación de subempleo en el sector informal, es decir que la mitad de la población carece de un empleo estable con un ingreso justo. En este estudio, casi la mitad de los encuestados (48.5%) expresan que han estado desempleados durante el último año (2003), y quienes han trabajado lo han hecho mayoritariamente en actividades por cuenta propia.

Las mujeres participan en el mercado de trabajo mucho menos que los hombres, siendo mayor la participación femenina en la zonas urbanas. Sus ingresos laborales son inferiores (14%) al promedio medio nacional y a la remuneración media que tienen los hombres (en 21%), como señala Trejos: “Esta brecha de ingresos es bastante amplia y, aunque tiene parte de su explicación en las diferentes jornadas, muestra también posibles problemas de discriminación salarial y formas diferenciales de inserción laboral, con predominio entre ellas del autoempleo y el servicio doméstico.”⁶

En este contexto, la emigración a Costa Rica, Guatemala o EE.UU. aparece como la mejor opción para tener un empleo remunerado; se calcula entre 850,000 y 1,000,000 de nicaragüenses que viven y trabajan fuera del país, muchos de ellos jóvenes y con un nivel educativo superior al promedio nacional. Estos emigrantes aportan en remesas unos US\$ 800 millones anuales para la sobrevivencia de sus familias, es decir la principal fuente de ingresos del país. Por otro lado, se han manifestado efectos negativos de la migración en términos de la desintegración familiar, la discriminación xenofóbica y la violación de derechos laborales y humanos⁷. En esta encuesta observamos que un 27% de la población ha manifestado expresamente su intención de irse a vivir o trabajar a otro país en los próximos años.

⁶ Trejos J.D. “Mercado de trabajo, ingresos laborales y pobreza en Nicaragua,” Managua, mimeo, 2004.

⁷ Martha Cranshaw, *Análisis de las migraciones en Nicaragua*, Managua, 2003.

La política gubernamental para enfrentar este fenómeno se ha centrado en la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza 2001-2015 (ERCERP), heredada del gobierno Alemán y condición del FMI para acceder a la HIPC, que esta basada en 4 pilares: crecimiento económico de base amplia (tasa proyectada del 4.2% anual), inversión en capital humano, protección a grupos vulnerables, gobernabilidad y desarrollo institucional. Entre las principales metas que se ha propuesto alcanzar la ERCERP para el año 2005, podemos señalar la reducción de la extrema pobreza del 17% en 1998 al 14% en 2005, aumentar la tasa neta de escolaridad primaria de 75% al 83%, reducir tasa de analfabetismo de 19% al 16 %, reducir desnutrición crónica de niños – 5 años de 20% al 16 %, aumentar cobertura nacional de agua potable del 67% al 75%⁸.

A dos años de iniciada la ERCERP los indicadores señalan un retroceso en distintas variables: quedaron fuera de las escuelas en 2003 unos 840,000 niños / as mientras el analfabetismo ha subido a un 30%, un desempleo creciente, una caída del salario real, un deterioro de condiciones laborales de quienes tienen empleo y una emigración creciente. Mientras se agudiza la desnutrición y la mortalidad infantil, el gasto publico en salud descendió de U\$ 50 per capita en 1983 a U\$ 16 en 2002⁹.

La ERCERP ha sido criticada por carecer de una visión de desarrollo sostenible basada en promover las capacidades humanas, por el contrario se priorizan medidas asistencialistas de corto plazo como un bono o pago que reciben familias indigentes con el compromiso de enviar uno de sus hijos a la escuela primaria. Desde una visión de desarrollo a largo plazo y de forma complementaria a la ERCERP, el gobierno Bolaños ha propuesto en 2003 un Plan Nacional de Desarrollo (PND) basado en la conformación de “clusters” o aglomerados con inversión extranjera y ligados al mercado externo, en rubros donde Nicaragua tiene ventajas comparativas, tal como ganadería, pesca, minería, forestal, turismo, textiles y agroindustria¹⁰.

1.3 El escenario político

Luego del proceso revolucionario sandinista (1979-89) que terminó con medio siglo de dictadura dinástica de los Somoza y que estableció un nuevo sistema político democrático de carácter representativo y participativo plasmado en la Constitución Política de 1987, encontramos en la década de los 90s la vigencia de procesos electorales con amplia participación ciudadana y supervisión internacional que permitieron la escogencia pacifica de los sucesivos gobiernos hasta esta fecha. Entre los avances en el fortalecimiento del estado de derecho se pueden mencionar la libertad de expresión y organización ciudadana, la subordinación de las fuerzas armadas y policiales a poder civil, la resolución de conflictos políticos en el marco de la institucionalidad.

Observamos que en las últimas elecciones presidenciales (1990, 1996, 2001) han triunfado las fuerzas opositoras al Frente Sandinista –Violeta Chamorro 1990-1996 con Unión Nacional Opositora, Arnoldo Alemán 1996-2001 con Alianza Liberal-, las cuales han sabido orquestar amplias alianzas partidarias, observándose una polarización política entre dos bandos opuestos que durante los 80s se enfrentaron con las armas y en los 90s con los votos.

⁸ Gobierno de Nicaragua, Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza, SETEC, Managua, 2001.

⁹ Jaime Espinoza, “Un sistema de salud que no funciona,” ENVIO N°245, UCA Agosto 2002.

¹⁰ Presidencia de la Republica, Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, Managua, Gobierno de Nicaragua, 2003.

El escenario político actual se establece con las elecciones de 2001 que fueron ganadas por el Partido Liberal Constitucional (PLC) con 56% de los votos validos para la formula presidencial del Ing. Enrique Bolaños y el Dr. José Rizo, frente a un 42% de votos adjudicados a los candidatos del Frente Sandinista (FSLN) Daniel Ortega y Ing. Agustín Jarquín.¹¹ La distribución de escaños en la Asamblea Nacional se dividió entre los dos partidos mayoritarios: 53 diputados para el PLC, incluyendo el ex-presidente Dr. Arnoldo Alemán, 38 para el FSLN incluyendo el candidato perdedor D. Ortega, y 1 diputado para el Partido Conservador. Fueron electas 20 mujeres como diputadas (22%) a la Asamblea (14 del FSLN) duplicando la proporción existente en la anterior asamblea, y en el PARLACEN alcanzaron 8 diputaciones (40%) mostrando un cierto avance en la equidad de genero. En un clima de tensión bajo acusaciones mutuas de fraude, la participación de votantes alcanzo un nivel de 72% de los inscritos, quedando por fuera un sector que no pudo votar por diversas razones: emigrantes fuera del país, carencia de documentos, indiferencia política, lejanía de la mesa receptora de votos o cambios de ubicación.¹²

Claramente se observa un voto polarizado entre las dos principales fuerzas políticas del país, lo cual refleja por un lado, la exclusión de otros partidos políticos debido a la reforma de la ley electoral acordada entre PLC-FSLN dentro de un pacto de repartición de cuotas en los poderes del estado (2000), y por otro lado, la herencia política de la guerra durante los 80s entre el movimiento revolucionario sandinista ligado al bloque socialista y los sectores opositores apadrinados por el gobierno norteamericano. En la “larga duración” el bipartidismo vertebró la dinámica política desde el siglo XIX así como las guerras y los pactos entre caudillos y grupos de poder son parte de la praxis política nacional.

El análisis de los resultados electorales nos devela que luego de 11 años se mantiene en el imaginario de una mayoría de los ciudadanos una valoración negativa del proceso revolucionario y la cruenta guerra de los 80s que se expresa en un voto antisandinista, a pesar de la crisis socio-económica vivida en los 90s, la corrupción e ineficacia de los últimos gobiernos. Sin dudas, el FSLN mantiene la adhesión firme de un sector importante de la ciudadanía (básicamente sectores sociales de estratos pobres y medios, beneficiados por la distribución de recursos y la participación lograda en los 80s) que la ubica en primera fuerza de oposición y/o de alianza con el partido gobernante. Una base política sólida a pesar del centralismo organizativo que limita críticas o liderazgos alternativos, y de presentar por tercera vez un candidato vulnerable (Daniel Ortega) por su reminiscencia del servicio militar y las penurias de la guerra en los 80s, que goza de aceptación amplia dentro del partido pero es rechazado fuera del FSLN.

Hay que destacar la masiva participación electoral, que triplica los índices de sistemas democráticos “desarrollados,” que obedece a corto plazo por una campaña motivadora del voto realizada tanto por partidos como por organizaciones civiles educativas, y por otro lado, revela avances en la apropiación de un derecho ciudadano desde el fin de la dictadura de Somoza, una valoración de su aporte al futuro del país y una esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Así en nuestra encuesta 2004, el 76% de los/as nicaragüenses piensan que la democracia es

¹¹ Aliados con el FSLN en una Convergencia con los partidos Social Cristiano, Movimiento Renovación Sandinista y otras figuras políticas, que se mantiene para la próximas elecciones.

¹² UCA, “Elecciones 2001,” ENVIO N°236 Nov.Dic.2001, Managua.

preferible a cualquier forma de gobierno, y solo un 14% opinan que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible (Ver Cap. VIII).

El proceso de transición a una democracia representativa se ha consolidado en las últimas décadas, sin embargo, la participación ciudadana es mucho menor en otras instancias locales y periódicas como los Cabildos Municipales o las organizaciones de incidencia política, o en la auditoría del gasto público y el seguimiento de las promesas electorales. La opción de presentar candidatos al gobierno municipal fuera de los partidos fue anulada en la última reforma electoral concentrando el control partidario de la vida política local. Tampoco los partidos promueven esta participación sistemática ya que se caracterizan por su dinámica electorera enfocada a obtener cargos en un estado que visualizan como fuente de ganancias y de poder, organizados en una estructura vertical bajo caudillos carismáticos que oscilan entre el enfrentamiento y los pactos.

Son escasas las instancias de participación ciudadana en las políticas públicas, tal como es el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), órgano consultivo de la Presidencia creado en 1999 por mandato constitucional y conformado por representantes de organizaciones sociales, gremiales¹³ y partidos políticos escogidos por el gobierno, cuyo funcionamiento hasta la fecha ha permitido una limitada incidencia de la sociedad civil en las decisiones políticas nacionales, destacándose sus aportes a la Estrategia de Reducción de la Pobreza, las reformas institucionales y el presupuesto anual de la república.

La problemática de la corrupción de funcionarios públicos había salido a la palestra pública a través de los medios de comunicación durante el gobierno Alemán, convirtiéndose en una demanda sentida de muchas organizaciones civiles incluyendo gremios empresariales. También actores internacionales como el BM, FMI y CE habían criticado la corrupción existente y la necesidad de tomar medidas para evitar este problema que afecta el clima de seguridad institucional requerido por los inversionistas y por la cooperación al desarrollo.

El Ing. Bolaños asume el gobierno a inicios del 2002 lanzando una campaña contra la corrupción con gran aceptación de la ciudadanía y de las organizaciones internacionales, y que condujo inevitablemente al enfrentamiento con el líder del PLC Alemán al comprobarse una serie de estafas al estado realizadas durante su gobierno (1997-2001) en beneficio personal, familiar y de un grupo de colaboradores que concluyeron con una sentencia condenatoria y su encarcelamiento. La mayoría de la dirigencia del PLC cerro filas en defensa de su líder, así el partido se dividió entre los fieles al caudillo y quienes buscaban un nuevo liderazgo liberal. En la Asamblea solo un pequeño grupo de diputados (6) se separó del PLC y formó una nueva bancada “azul y blanco,” lo que significó que el poder ejecutivo perdió sus bases en el segundo poder del estado lo cual es indispensable para la aprobación de leyes como el presupuesto nacional anual, acuerdos internacionales y nombramientos de cargos en los otros poderes del estado, generándose así una situación de conflictos entre los poderes y de parálisis gubernamental.

El aislamiento del ejecutivo es mayor en los otros poderes del estado cuya dirección está distribuida entre el FSLN y el PLC –espacios políticos donde sigue vigente el pacto bipartidista- tal como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la

¹³ Pertenecientes a organizaciones empresariales, sindicales, comunitarias, universidades, profesionales, juventud, periodistas, ONGs, mujeres, municipales y regiones del Atlántico.

Fiscalía, lo cual marca los límites de acción del gobierno Bolaños y su necesidad de alianzas y de fortalecer su base social propia. Por estas razones, el ejecutivo ha promovido sin éxito, la conformación de un nuevo partido, Grupo de Unidad Liberal tratando de unificar a distintas corrientes y personalidades liberales apostando a la desarticulación del PLC con la condena y desaparición del Alemán del escenario político.

La fuerte reacción del sector liberal arnoldista ha agudizado la contradicción política que atraviesa distintos poderes del estado, la iglesia y la sociedad civil durante esta larga coyuntura 2002-04 paralizando el funcionamiento estatal y afectando seriamente la gobernabilidad democrática y la institucionalidad del país. Este clima confrontativo ayuda comprender los resultados de nuestra encuesta 2004 que indican un incremento de la intolerancia política y una caída de los niveles de apoyo al sistema político (Ver Cap. III) observado en anteriores estudios realizados por el Dr. Seligson en nuestro país.¹⁴

La ciudadanía se manifestó públicamente contra la corrupción a través de distintas vías, dinamizado por redes sociales reconocidas como la Coordinadora Civil, la Red por la Democracia, la Red de Mujeres, el Movimiento Estudiantil Universitario, sindicatos, organizaciones comunales, religiosas y otros actores sociales. Sin embargo, el entusiasmo ciudadano por la política anticorrupción del gobierno fue decreciendo paulatinamente por varias razones, tales como el uso de fondos fraudulentos en la campaña del Ing. Bolaños, los altos salarios y pensiones de funcionarios incluyendo al presidente, las negociaciones “por debajo de la mesa” con implicados en actos de corrupción y por último el desencanto por la falta de cumplimiento de promesas electorales en términos de empleo y necesidades básicas.

La propuesta de reforma del estado del Gobierno Bolaños ha generado un amplio debate y el rechazo de los partidos mayoritarios que controlan la Asamblea, ya que apuntaba a la reducción del número de funcionarios (diputados, jueces, contralores) la despartidización de los poderes del estado, una ley servicio civil, la apertura del sistema electoral a otros partidos y asociaciones civiles a nivel municipal, la elección uninominal de diputados, la reforma a la inmunidad de funcionarios. Sin embargo, el Consejo Electoral ha permitido una apertura del juego electoral al reconocer la personería jurídica de muchos partidos (de 26 en 1996 quedaron 3 en 2001) luego de un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional las restricciones de la ley electoral pactada en 2000 por el FSLN y PLC.

El escenario político ha estado dinamizado por movimientos sociales que han planteado sus reivindicaciones por medios pacíficos como a través de marchas y cortes de rutas, tal como el sector de productores cafetaleros y obreros agrícolas afectados por la crisis del rubro, los estudiantes universitarios defendiendo el derecho constitucional al 6% del presupuesto, los trabajadores de la educación y la salud por un salario mínimo, los transportistas por ajustar las tarifas al alza de costos, los excombatientes por el cumplimiento de las promesas históricas, las comunidades étnicas por sus derechos a la tierra y la reglamentación de la autonomía costeña que finalmente lograron.

Estas movilizaciones muestran la vitalidad de distintos actores de una sociedad civil rica en su diversidad de culturas, proyectos y organizaciones, que se han convertido en los últimos años en

¹⁴ Mitchell Seligson, *Auditoria de la democracia 1999*, University of Pittsburgh, 2000.

instancias de participación ciudadana que los partidos políticos no canalizan y de atención a demandas sociales que el estado no responde. En Nicaragua actual nos encontramos con un heterogéneo y multitudinario universo de organizaciones civiles¹⁵ que incluyen sindicatos, cooperativas, movimientos sociales, organizaciones comunales, grupos filantrópicos y religiosos, organizaciones de educación y desarrollo. Este estudio muestra que en 2004 una mayoría de la población participa regularmente en alguna asociación civil o religiosa, donde encuentra un sentido de identidad, un intercambio solidario y la reivindicación colectiva de demandas. (Ver Cap. VIII)

Se ha destacado en los últimos años las ONGs de desarrollo que suman un estimado de 800 organizaciones que trabajan en la promoción del desarrollo humano en áreas tales como derechos de la niñez y de las mujeres, agro ecología, salud y rehabilitación, derechos humanos, crédito, cultura y ciudadanía, gracias a una cooperación externa que va decreciendo en los últimos años y aumentando la condicionalidad de sus fondos. Gran parte de las ONGs se encuentran nucleadas en redes nacionales, destacándose la Coordinadora Civil que agrupa 24 redes o movimientos con 250 organizaciones, la Red Democracia y Desarrollo Local (38 org. en 77 municipios), la Red Mujeres contra la Violencia (61 org.), Coordinadora Niñez y Adolescencia (41 org.), Federación de ONGs (32 org.), Federación de Organismos por la Rehabilitación e Integración (16 org.), Red de Migraciones (17 org.).

Estas redes han permitido superar parcialmente la tendencia a la dispersión (geográfica, sectorial y temática) y la descoordinación entre actores sociales a fin de consensuar agendas y propuestas de incidencia política a nivel nacional y regional, tal como las propuestas de un plan de desarrollo sostenible de la Coordinadora de Organizaciones Civiles luego del huracán Mitch, el código de la niñez y adolescencia, la ley contra la violencia familiar, la ley de participación ciudadana, propuestas a la política y plan nacional de población, la estrategia de reducción de la pobreza, la política de descentralización y de migraciones.

Estos avances de participación ciudadana hay que ubicarlos dentro de la paradoja que los esfuerzos de incidencia política se dirigen a un estado debilitado por el traspaso de decisiones a instancias supranacionales, su carácter fragmentado, burocrático y deficitario, y su concepción de ser un simple facilitador del mercado capitalista como regulador socioeconómico que debería responder a las demandas sociales.

1.4 Estudios sobre cultura política en Nicaragua

Los estudios pioneros en este ámbito fueron elaborados los politólogos norteamericanos Gabriel Almond y Sydney Verba quienes sostienen que la cultura política nacional ejerce una influencia sobre las conductas de los ciudadanos. Los autores definen la cultura política se refiere a orientaciones específicas que hacen relación al sistema político y sus varias partes, orientaciones o internalización de aspectos y sus relaciones en forma de cogniciones, sentimientos y evoluciones de la población, pero también a las actitudes y el rol de uno mismo en el sistema político. Las relaciones entre cultura política y sistema social son de interdependencia como

¹⁵ En los registros del Ministerio de Gobernación se contabilizan unas 2,800 organizaciones sin fines de lucro, no todas están activas, y hay muchísimas más que existen de hecho ya que no han pasado el costoso y burocrático trámite de personería jurídica que requiere una ley especial de la asamblea nacional.

aclaran Almond y Verba: “Está claro que la cultura política se trata como variable independiente y también dependiente; como algo que causa la estructura y que es causado por ella.”¹⁶

Esta hipótesis ha sido confirmada por investigaciones recientes realizadas en Centroamérica por M. Seligson y J. Booth, en la cual han encontrado rasgos de cultura política democrática en países que han tenido regímenes políticos disímiles, tal como Costa Rica y Nicaragua: “si la cultura política es una determinante del tipo de régimen o viceversa, uno esperaría encontrar una cultura política democrática en Costa Rica y otra autoritaria en Nicaragua..... aunque de ninguna manera eliminamos la influencia recíproca entre cultura de masas y tipo de régimen, es evidente que otros factores, incluyendo la cultura de elite, la evolución institucional, las consideraciones utilitarias y las versiones opuestas de la justicia también deben influir sobre la evolución de la cultura democrática y el surgimiento de los regímenes democráticos en Latinoamérica.”¹⁷

En Nicaragua podemos distinguir tres tipos de estudios que se han realizado sobre la cultura política¹⁸ nicaragüense: uno de carácter historiográfico, otro de ensayos interpretativos y un sector de investigaciones empíricas.

En el primer grupo, ubicamos las investigaciones históricas de alto rigor metodológico que enfocan elementos constitutivo de la cultura política nacional, destacándose los trabajos de Bradford Burns, Frances Kinloch y Karlos Navarro¹⁹. Los historiadores muestran que el proceso de formación de la cultura política nicaragüense se remontan al pasado colonial con un perfil claramente autoritaria.

Kinloch argumenta que la conformación de una identidad nacional ha sido fuertemente limitada debido a la forma de organización del poder político durante la colonia que generaron intensos localismos. Luego de la independencia de España, encontramos una elite criolla embebida del pensamiento ilustrado que propugnaba el patriotismo, la integración social, la igualdad y una identidad regional. Sin embargo, “El evolucionismo progresista, que inspiraba las grandiosas visiones de prosperidad de los intelectuales y políticos ilustrados, era completamente ajeno a la mentalidad popular. Por el contrario, las esperanzas del campesinado en el advenimiento de un orden social más justo encontraron su principal marco de referencia en la religión e idealización del pasado”²⁰

El carácter patriarcal de la sociedad y la cultura política legado de la época colonial, ha sido analizado por B. Burns quien destaca su rol clave en mantener el orden social durante el conflictivo periodo posterior a la independencia de España. “la familia patriarcal lleno, en alguna medida, el vacío político y se constituyó en un factor vital para la conservación de la sociedad.”

¹⁶ Almond, Gabriel and Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

¹⁷ Seligson M. y Booth J.A., “Cultura política y democratización: vías alternas en Nicaragua y Costa Rica,” en C.Barbara, et. al, *Transiciones a la democracia en Europa y América Latina*, México, FLACSO, 1991. Ver Seligson y Booth, *Elections and Democracy in Central America, Revisited*, Univ. North Carolina, 1995.

¹⁸ Conforme la propuesta de Cuadra E. y Montenegro S., *Cultura política de la juventud en Nicaragua*, Managua, CINCO, 2002.

¹⁹ E. Bradford Burns, *Patriarch and Folk: the emergence of Nicaragua 1798-1858*; Harvard Univ.Press, 1991.

²⁰ Kinloch F., *Nicaragua Identidad y cultura política 1821-1858*, Fondo editorial, Banco Central de Nicaragua. Managua, 1999. Pág. 52.

Los rasgos distintivos de este sistema patriarcal serían la supremacía del padre en la estructura jerárquica de la familia y del espacio político, subordinando a mujeres, hijos, familiares y trabajadores que debían fidelidad personal y política al caudillo-patriarca.

Por su parte, el historiador Karlos Navarro ha estudiado el proceso de construcción de la cultura política de las elites de poder influenciado por las ideologías liberales y conservadoras, diferenciadas en sus fundamentos filosóficos y en sus enfoques sobre el ejercicio del poder. Sin embargo, el autor releva un proceso de confluencia ideológica en la segunda mitad del siglo XIX gestándose un pensamiento llamado “conservadorismo liberal,” que enfatizaba un gobierno centralizado y un orden social tradicional, al mismo tiempo que retomaba el paradigma del progreso y la modernidad identificado con los países de Europa occidental y Estados Unidos.²¹

Igualmente centrados en el estudio de las elites políticas, encontramos un segundo tipo de estudios o ensayos recientes sobre la cultura política nicaragüense que tratan de identificar sus rasgos distintivos conformados históricamente y que se reproducen hasta la actualidad condicionando las prácticas políticas y las concepciones predominantes. Un precursor de esta perspectiva de abordaje de la cultura política que enfatiza la determinación del pasado ha sido el reconocido poeta Pablo Antonio Cuadra, quien planteó que los “rasgos” definitorios del ser nicaragüense se explican en la historia de nuestro mestizaje, así el origen de la violencia y la crueldad en la política nicaragüense provendrían del militarismo náhuatl sumado al autoritarismo hispánico.²²

El politólogo E. Álvarez Montalbán considera que la cultura es un conjunto estructurado de principios, ideales, leyendas, experiencias, folclore, mitos y utopías, que condicionan el desenvolvimiento económico de una nación y la calidad de su régimen político. Basado en una definición de cultura política como “posición o actitud que determinado grupo social adopta y expresa sobre asuntos relacionados con la política”²³, el autor considera que Nicaragua atraviesa una transición de una sociedad tradicional oligárquica hacia una sociedad democrática, observándose un panorama heterogéneo de valores y concepciones, predominando en las elites una cultura política caracterizada históricamente por los siguientes rasgos:

- El autoritarismo expresado a través de caudillos o caciques.
- La intolerancia política y la violencia que se alternan con los pactos entre líderes.
- El nepotismo, amiguismo y el compadrazgo.
- El patrimonialismo y corrupción en el manejo de bienes públicos.
- El cortoplacismo y la improvisación política.

En una perspectiva similar, el economista y sociólogo O. René Vargas enfatiza la influencia del legado colonial sintetizado en un mito político “El síndrome de Pedrarias,”²⁴ que ha sido reproducido sistemáticamente por las elites dominantes hasta el presente. El autor coincide con

²¹ Karlos Navarro, *Entre el poder y la historia. Ideologías transmutadas*. Managua, Centro Nicaragüense de Escritores, 2000.

²² Cuadra Pablo A., *El Nicaragüense*, Ed. Unión, Managua, 1968.

²³ Álvarez Montalbán E., *Cultura política nicaragüense*, Hispamer, Managua, 2000. Pág. 70.

²⁴ Gobernador hispano de Nicaragua a inicios del XVI destacado por su autoritarismo y crueldad. Oscar René Vargas. *El síndrome de Pedrarias*, CEREN, Managua, 1999.

Montalbán en los rasgos de la cultura política nicaragüense, destacando el presidencialismo e incorporando otros elementos como el desprecio a la ley; la manipulación y la mentira como instrumentos políticos, la ingerencia eclesiástica en la política, la mezcla de interés partidarios e interés de estado, y en definitiva, Nicaragua sería una sociedad dominada por el pasado y sin visión de futuro.

Otro grupo de estudios realizados en las últimas décadas sobre la cultura política corresponde a investigadores que han realizado estudios empíricos, predominantemente cuantitativos basados en un marco teórico-conceptual sobre la cultura política, la participación ciudadana y la democracia.

En los años 80s se destacan los estudios de Francois Houtart y Genevieve Lemercinier²⁵ sobre las transformaciones culturales en Nicaragua, basados en un conceptualización de la cultura como “el conjunto de representaciones producidas por el pensamiento en condiciones sociales precisas, que introduce, a la vez, la realidad natural o social en el campo de la conciencia, y permite, simultáneamente, la reproducción de las prácticas necesarias para la dominación de la naturaleza y para la construcción de las relaciones sociales.”²⁶ Estos estudios sostienen que en la sociedad nicaragüense se encuentra en un proceso de transición entre una categoría de “pensamiento mítico” típico de sociedades tradicionales que explican la realidad en función de fenómenos sobrenaturales, y una categoría de “pensamiento analítico,” característico de las sociedades modernas que enfoca la realidad en términos interrelaciones causales de sus componentes. Entre los factores dinamizadores de esa transición cultural, los autores destacan la gasificación de la educación, el impacto nacional de la guerra que acelera la migración hacia las ciudades, el elevado crecimiento demográfico y la movilidad social ascendente de clases populares beneficiadas por el proceso revolucionario sandinista.

Este enfoque investigativo ha sido ampliado en los 90s por Manuel Ortega y Marcelina Castillo (CASC-UCA) con diversos estudios sobre cultura política y participación ciudadana a nivel local en los municipios y en regiones autónomas de la Costa Atlántica²⁹ Se desatan sus estudios específicos sobre la cultura política de la elites locales en el funcionamiento de los gobiernos municipales, y el análisis de la participación ciudadana en las elecciones municipales del 2000²⁷.

Los estudios realizados por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN)²⁸ señalan que existe una diferencia entre una cultura política de elites y una cultura política de las mayorías. La primera se caracterizaría por un bajo apoyo a las normas democráticas, una alta intolerancia política, una visión de “suma cero” de juego político, concentrada en los partidos con poca interacción con la

²⁵ Centro Tricontinental de la Univ. de Louvain-la-Neuve y fundadores del Centro de Análisis Socio-Cultural en la Universidad Centroamericana (CASC-UCA).

²⁶ Houtart F., *Transformation de la religion du paysannat et de l'espace social de l'institution religieuse dans un processus de transition: le cas de Nicaragua*, Centro Tricontinental, LLN, 1985.

²⁹ Manuel Ortega Hegg. Encuesta: cultura política y actitudes hacia las elecciones y el régimen de autonomía en las regiones autónomas, CASC-UCA, 1997.

²⁷ Manuel Ortega Hegg, Marcelina Castillo, Cultura política local y percepción ciudadana en 14 municipios de las Segovias, CASC-UCA. Ricardo Córdova Macías-Manuel Ortega Hegg. Centroamérica: gobierno local y participación ciudadana en Nicaragua. FLACSO Programa El Salvador, 1996.

²⁸ Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN). Cultura política. Cuaderno No. 1., IEN, Managua, 1997. También ver: “Gobernabilidad, Descentralización y Participación Ciudadana.” Managua, Febrero 1999.

sociedad civil, favorable a la centralización estatal y sin una visión de nación a largo plazo. Por otro lado, los rasgos principales de la cultura política ciudadana presenta alto nivel de apoyo a las normas democráticas y valores de paz y reconciliación, el voto electoral como única vía de acceso al poder; los medios pacíficos, graduales y acordados entre todos para lograr cambios sociales y trabajar por el bien común.

Desde un enfoque generacional, Sofía Montenegro y Elvira Cuadra han estudiado la cultura política de la juventud nicaragüense mediante una encuesta de opinión y entrevistas a informantes, encontrando un panorama ideológico “de carácter híbrido en el que sobresalen algunos componentes de parroquialismo, al lado de componentes de subordinación y participación.”²⁹ En esta cultura juvenil heterogénea, por un lado predominan una concepción que enfatiza el orden social por sobre las libertades individuales y que se muestra intolerante con otras posiciones. Por otro lado, un sector significativo de la juventud opta claramente por el sistema democrático, la escogencia de autoridades mediante el voto, el respeto a los derechos ciudadanos y la tolerancia política.

Basado en una metodología rigurosa de encuestas con muestras probabilísticas y con indicadores precisos, homogéneos y ampliamente validados para facilitar el análisis comparativo de la cultura política, se destacan las investigaciones realizadas por el Dr. M. Seligson en América Latina, incluyendo los estudios realizados en Nicaragua en 1991, 1995, 1997, 1999³⁰ y esta del 2004. La aplicación sucesiva del mismo instrumento nos permiten detectar la evolución de elementos claves de nuestra cultura política como la tolerancia, la legitimidad y los valores democráticos. Por otro lado, los estudios realizados sistemáticamente en la región centroamericana, nos permiten realizar análisis comparativos basados en evidencias empíricas sólidas³¹, especialmente en este estudio 2004 que abarca 8 países de la región.

En nuestro estudio compartimos la conceptualización de M. Seligson y R. Córdova sobre cultura política como “el conjunto de actitudes, valores creencias, comportamientos y representaciones compartidos en diversos grados por los miembros de una sociedad, con relación al poder, a la instituciones normas que regulan el funcionamiento del Estado y la forma de relacionarse que tiene la población con este último, y que establecen el contexto en el cuales genera el pensamiento y sentimiento de la ciudadanía (socialización)”³².

Este enfoque supone que la cultura política es un producto histórico y un proceso dinámico de construcción o reproducción realizado por los actores sociales y políticos, donde se puede observar en un corte sincrónico, la coexistencia de una pluralidad de representaciones, ideas y

²⁹ Montenegro y Cuadra, Op.cit., 2001. Pág. 197.

³⁰ Seligson Mitchell, Auditoria de la Democracia Nicaragua 1999, Univ. Pittsburg, 2000. Mitchell A. Seligson-Ricardo Córdova M. “Nicaragua 1991-1995: una cultura política en transición,” en el libro, Cultura política y transición democrática en Nicaragua. FFE-FUNGO-IEN-CASC-UCA, Managua, 1995.

Seligson M. Valores democráticos en Nicaragua: 1991-1997. Mimeo, University of Pittsburgh, 1998.

Seligson, Mitchell A y Ricardo Córdova Macías. 1995. El Salvador: de la guerra a la paz. Una cultura política en transición. El Salvador, FUNDAUNGO, University of Pittsburgh e IDELA.

³¹ Seligson M., *La Cultura democrática de los guatemaltecos*. Cuarto Estudio 1999. Guatemala, University of Pittsburgh.

³² M. Seligson y R. Córdova, *Cultura política, gobierno local y descentralización. América Central*, Vol. I, FLACSO, San Salvador, 2001, Pág. 14.

valores, algunas compartidas a nivel de toda una colectividad mayor como la identidad nacional, y otras particulares de determinados grupos sociales y actores políticos.

1.5 Conclusiones

En resumen, el contexto económico actual de Nicaragua se caracteriza por una profunda recesión originada por factores estructurales tales como un aparato productivo obsoleto, un grave desbalance fiscal y de las cuentas externas, todo ello agravado por factores coyunturales como el alza del precio del petróleo y la retracción económica en los países del norte.

A nivel social, encontramos una situación de pobreza que afecta a la mayoría de la población que carece de alternativas de ingresos estables y suficientes para cubrir los costos de la canasta básica familiar, salvo la emigración hacia otros países de la región. Las remesas familiares y la cooperación externa han contribuido a paliar esta situación de desbalance externo y de sobrevivencia familiar.

Políticamente, Nicaragua atraviesa en las últimas décadas un difícil proceso de transición de regímenes autoritarios hacia un sistema político democrático representativo y participativo. En la balanza positiva, se ubica el relevo pacífico de los sucesivos gobiernos electos mediante votaciones y la vigencia de los derechos políticos fundamentales. Sin embargo, queda pendiente consolidar el estado de derecho y la participación ciudadana, al mismo tiempo que superar la cultura política caudillista y excluyente de las elites de poder.